Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a **seis de noviembre de dos mil veinticuatro**.

**Visto** el expediente formado con motivo del recurso de revisión **05129/INFOEM/IP/RR/2024**, interpuesto por  **una persona que no proporcionó nombre o seudónimo,** en lo sucesivo **la parte** **Recurrente,** en contra de la respuesta a su solicitud por parte del **Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca,** en lo sucesivo el **Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

**I. A N T E C E D E N T E S**

**1. Solicitud de acceso a la información.** El **cinco de agosto de dos mil veinticuatro,** la parte **Recurrente** a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo subsecuente el SAIMEX, formuló ante el **Sujeto Obligado**, la solicitud de acceso a la información pública a la que se le asignó el número **00159/DIFTOLUCA/IP/2024,** mediante la cual requirió la información siguiente:

*“solicito todos los convenios vigentes que se tienen con esta dependencia, así como el documento oficial en donde se autoriza o se firma la autorización o equivalente de asesoría legal, representación legal o cualquier tipo de servicio en materia jurídica, donde se visualice el acuerdo de ambas partes, facultades y el nombre de quien o quienes son los involucrados, así como el monto de recurso público que se entrega o se ha entregado” (Sic)*

**Modalidad elegida para la entrega de la información:** a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

**2. Respuesta.** El **veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro**, el **Sujeto Obligado** envió su respuesta a la solicitud de acceso a la información a través de SAIMEX, sustancialmente en los términos siguientes:

*“En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 fracción II, IV, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, adjunto a la presente se anexa oficio número 200B10100/474/2024 de fecha 23 de agosto de 2024, así como los elementos necesarios para la atención de la solicitud de información interpuesta a este Sujeto Obligado” (Sic)*

Adjunto a la respuesta, el **Sujeto Obligado** entregó los siguientes documentos:

* **Respuesta SPH 159-2024.PDF:** Contiene los siguientes documentos:
* Oficio del 20 de agosto de 2024, a través del cual la Directora de Administración y Tesorería informa que de la búsqueda exhaustiva y razonable sólo se cuenta con un convenio celebrado y vigente a la fecha de la solicitud denominado “Contrato de Donación de Servicios Profesionales en Materia Laboral, celebrado con la moral Mfontova Asoc. S.C” del que se indica que se remite y se clasifica como información confidencial contenido en el mismo, consistente en: clave de elector, Registro Federal de Contribuyentes y firma.
* Cuadro de la propuesta de Clasificación de Información Pública contenida en el convenio de donación, donde se propone clasificar como información confidencial: clave de elector, Registro Federal de Contribuyentes y firma.
* Oficio del 8 de agosto de 2024, a través del cual el Director de Servicios Jurídicos Asistenciales señala que todos los convenios vigentes que se tienen están publicados en la fracción XXXVIII “Convenios de coordinación, de concertación con el Sector Social o Privado” del artículo 92 de la página del IPOMEX, proporcionando el enlace: 

Consecuentemente, respecto al requerimiento consistente en “*el documento oficial en donde se autoriza o se firma la autorización o equivalente de asesoría legal, representación legal o cualquier tipo de servicio en materia jurídica*”, el documento oficial que autoriza brindar asesoría legal, representación jurídica o cualquier tipo de servicio en materia jurídica es la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de carácter Municipal, denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, específicamente lo mencionado en el artículo 3 fracción VI, citando dicha porción legal:



Asimismo, se indica que donde se visualiza el acuerdo de ambas partes, facultades y el nombre de quien o quienes son los involucrados que autorizaron la facultad de brindar asesoría jurídica al Sujeto Obligado, fueron el entonces Gobernador Constitucional del Estado y el Secretario de Gobierno tal y como menciona la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de carácter Municipal, denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 16 de julio de 1985; proporcionando un link para consultarla en formato cerrado:



* **ANEXO DE LA 159-2024.pdf:** Contrato de Donación de Servicios Profesionales en Materia Laboral, celebrado con la moral Mfontova Asoc. S.C el 24 de enero de 2024,  **en el que se dejó a la vista a foja 1 la clave de elector del representante legal de la moral indicada.**
* **Acta 58 Extraordinaria Comite deTransaprencia .PDF:** Acta de la Sexagésima Octava Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca número SMDT/CT/23082024-E-68 del 23 de agosto de 2024, donde se llevó a cabo bajo el punto 4 del orden del día, la presentación, y en su caso, aprobación de la propuesta de clasificación de información como confidencial contenida en el anexo para dar respuesta a la solicitud de información de nuestra atención, donde se consideró como información confidencial el RFC, Clave de Elector y Firma autógrafa.
* **Respuesta UIPPE 159-2024.PDF:** Oficio del 23 de agosto de 2024, a través del cual la Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, y designado para la Atención de la Unidad de Transparencia, informó a la persona solicitante que adjuntaba la respuesta del servidor público habilitado de la Dirección de Administración y Tesorería y el acuerdo del Comité de Transparencia.

**3. Interposición del recurso de revisión.** Inconforme con los términos de la respuesta emitida por parte del **Sujeto Obligado**, el **veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro,** **la parte** **Recurrente** interpuso el recurso de revisión a través de **SAIMEX,** en donde se manifestó de la siguiente manera:

**a) Acto impugnado:** *“la respuesta” (Sic)*

**b) Razones o motivos de inconformidad**: “*no entregan todo lo solicitado, dejan datos personales a la vista y vulneran el derecho humano de acceso a la información pública”* *(Sic)*

**4. Turno.** De conformidad con el artículo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, el presente recurso de revisión se turnó por el sistema electrónico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, a la Comisionada **Guadalupe Ramírez Peña,** a efecto de que analizara sobre su admisión o su desechamiento.

**5. Admisión del Recurso de revisión.** Mediante acuerdo del **veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro,** notificado en esa misma fecha,este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, admitió a trámite el recurso de revisión que ahora se resuelve, dando un plazo máximo de siete días hábiles para que las partes manifestaran lo que a su derecho resultara conveniente, ofrecieran pruebas, formularan alegatos y el **Sujeto Obligado** presentara su informe justificado.

**6. Manifestaciones**. De las constancias que obran en el expediente electrónico aperturado con motivo del presente medio de impugnación, se advierte el **Sujeto Obligado** rindió su informe justificado el **diecinueve de julio de dos mil veinticuatro,** a través de los archivos electrónicos que contienen la información siguiente:

* ***IJ RR 05129-2024.PDF***: Oficio del 29 de agosto de 2024, a través del cual la Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, y designado para la Atención de la Unidad de Transparencia ratifica la respuesta inicial, no obstante también a través de dicho oficio se inserta la digitalización del Contrato de Donación de Servicios Profesionales en Materia Laboral, celebrado con la moral Mfontova Asoc. S.C el 24 de enero de 2024 entregado en respuesta, en versión pública donde únicamente se clasificó el dato relativo a la clave de elector del representante legal de la moral indicada, así como el cuadro de clasificación de información pública propuesto por la Directora de Administración y Tesorería, en el que solamente se consideró la clasificación como información confidencial de la clave de elector indicada.
* Acta de la Septuagésima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia número SMDT-CT-29082024-E-70 del 29 de agosto de 2024, donde se llevó a cabo bajo el punto 4 del orden del día, la presentación, y en su caso, aprobación de la propuesta de clasificación de información como confidencial contenida en el anexo para dar respuesta a la solicitud de información de nuestra atención que dio origen al recurso de revisión de referencia, donde se consideró como información confidencial el RFC, Clave de Elector y Firma autógrafa.

Documentos los anteriores que se pusieron a la vista de la parte **Recurrente** a fin de que hiciera valer manifestaciones o rindiera alegatos que conforme a derecho resultaran convenientes; no obstante, fue omisa en ejercer dicha prerrogativa.

**7. Ampliación del plazo.** El **nueve de octubre de dos mil veinticuatro**, se notificó a las partes el Acuerdo de Ampliación de Plazo para resolver el medio de impugnación que nos ocupa, en términos de lo dispuesto por el artículo 181, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**8. Cierre de instrucción.** Una vez transcurrido el periodo otorgado a las partes para realizar sus manifestaciones y no habiendo documentos que integrar al expediente, con fecha **veintidós de octubre de dos mil veinticuatro,** la Comisionada Ponente determinó el cierre de instrucción en términos de la fracción VI del artículo 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En razón de que fue debidamente sustanciado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la Resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo con los siguientes:

**II. C O N S I D E R A N D O S**

**Primero. Competencia.** El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 párrafos trigésimo tercero, trigésimo cuarto y trigésimo quinto fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185, fracción I, 186 y 188 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 9, fracciones I y XXIII; y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**Segundo. Oportunidad y Procedibilidad del Recurso de Revisión**. Previo al estudio del fondo del asunto, se procede a analizar los requisitos de oportunidad y procedibilidad que debe reunir el recurso de revisión interpuesto, previstos en los artículos 178 y 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles, previsto en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, toda vez que el **Sujeto Obligado** remitió la respuesta a la solicitud de información el **veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro,** mientras que el recurso de revisión interpuesto por **la parte** **Recurrente**, se tuvo por presentado el **veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro,** esto es, el mismo día hábil en **que se tuvo conocimiento de la respuesta impugnada**.

Sin que contraríe a lo anterior, el artículo 178 en análisis, refiere que el plazo de quince días hábiles se contará a partir del día siguiente de la fecha en que el afectado tuvo conocimiento de la resolución materia de impugnación, ya que ello debe entenderse para el efecto de que transcurrido dicho plazo ya no podrá presentarse el medio de impugnación o si es que se presenta, el mismo se considerará extemporáneo, no así cuando el medio de defensa se interponga antes de que comience a correr el plazo legal; tiene aplicación por analogía, la jurisprudencia 1ª. /J.41/2015, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 569 de la Décima época que lleva por rubro y texto los siguientes:

***“RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU INTERPOSICIÓN NO ES EXTEMPORÁNEA SI SE REALIZA ANTES DE QUE INICIE EL PLAZO PARA HACERLO****.*

*“Conforme al artículo 104, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación podrá interponerse por cualquiera de las partes, por escrito, dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada. Ahora bien, dicho numeral sólo refiere que el aludido medio de defensa no puede hacerse valer después de tres días, por tanto, no impide que el escrito correspondiente se presente antes de iniciado ese término. De ahí que si dicho recurso se interpone antes de que inicie el plazo para hacerlo, su presentación no es extemporánea.”*

En este sentido, se concluye que el presente recurso de revisión se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en las disposiciones legales referidas.

Al mismo tiempo, por cuanto hace a la procedibilidad del recurso de revisión, una vez realizado el análisis del formato de interposición del recurso, se concluye la acreditación plena de los elementos formales precisados por el artículo 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en atención a que fue presentado mediante el formato visible en el SAIMEX.

Por otro lado, es de suma importancia mencionar que, si bien la parte **Recurrente** **no proporcionó un nombre** como se advierte en el detalle de seguimiento del SAIMEX; sin embargo, el no proporcionar un nombre no es motivo para archivar la solicitud de acceso a la información pública como concluida, conforme a lo previsto en el artículo 155, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que establece lo siguiente:

*"****Las solicitudes anónimas****, con nombre incompleto o seudónimo****serán procedentes para su trámite por parte del sujeto obligado ante quien se presente****. No podrá requerirse información adicional con motivo del nombre proporcionado por el solicitante."*

Finalmente, se advierte que resulta procedente la interposición del recurso, según lo manifestado por **la parte** **Recurrente** en sus motivos de inconformidad, de acuerdo al artículo 179, fracción I del ordenamiento legal citado, que a la letra dice:

*“****Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

***I. La negativa a la información solicitada;***

 ***[…]”***

*(Énfasis añadido)*

**Tercero. Materia de la revisión.** De la revisión a las constancias y documentos que obran en el expediente electrónico se advierte que, el tema sobre el que este Organismo Garante de Transparencia y Acceso a la Información se pronunciará será: **verificar si la respuesta e informe justificado otorgados por el Sujeto Obligado son adecuados y suficientes para satisfacer el derecho de acceso a la información pública de la parte Recurrente,** o en su defecto, en caso de ser procedente, ordenar la entrega de información oportuna.

**Cuarto. Estudio del asunto.** Antes de entrar al análisis de los pronunciamientos del **Sujeto Obligado** en la respuesta proporcionada, es necesario mencionar que el derecho de acceso a la información está consagrado en instrumentos internacionales de los cuales el Estado Mexicano se ha adherido, sin oponer reserva alguna sobre lo que nos interesa, adoptando dichas disposiciones al Derecho Interno, específicamente a nivel Constitucional, tal y como lo prevén los arábigos 1 párrafos primero, segundo y tercero y 6 apartado A fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII que a la letra señalan:

***Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte****, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

***Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.***

***Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.*** *En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley*

*[…]*

***“Artículo 6o.***

*[...]*

***A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas,*** *en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

***I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes*** *Ejecutivo, Legislativo* ***y Judicial****, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal,* ***es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional,*** *en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*

***II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.***

***III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública,*** *a sus datos personales o a la rectificación de éstos.*

***IV.*** *Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.*

***V.*** *Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.*

***VI.*** *Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.*

***VII.*** *La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. [...]”*

Esto es, que cualquier persona tiene el derecho al acceso de la información pública, información que consiste en aquella que sea generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, como así también lo señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios en su artículo 4, que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados, es pública y accesible, de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad, como así lo establece dicha determinación, que a continuación se transcribe para un mejor entendimiento:

*“****Artículo 4****. El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona****, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 29 como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

***Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes****.”*

Esto es, que los Sujetos Obligados tiene la obligación o deber de atender las solicitudes de acceso a la información pública que se les hagan de su conocimiento y proporcionar la información pública que obren en su poder conforme el estado que se encuentra y no hacer un procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante; como así lo establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que a la letra dice:

***“Artículo 12.-*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

***Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre****.* ***La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones”.***

Es decir, que todo sujeto obligado que genere, recopile, administre, procese, archive, posea o conserven, son responsables de la misma teniendo a su vez la obligación de proporcionar la información que se les requiera sin necesidad de resumirla, efectuar procedimientos para obtenerla, calcular y practicar investigaciones; en otras palabras, que los Sujetos Obligados sólo se concretaran a proporcionar la información solicitada que tengan en su poder en el estado que se encuentran, sin necesidad de concretarse al interés o términos específicos del solicitante.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio 03-17, expuesto por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que dice:

*“****No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información.*** *Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información”.*

En esa tesitura, el artículo 24 en su último párrafo de la Ley de la Materia, dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública.

Siempre y cuando no se trate de información reservada o clasificada, que difundirla pondría en riesgo la seguridad jurídica y física del titular de la información, debiendo tener audacia los Sujetos Obligados para cuidar esta información a través del acuerdo clasificatorio del comité de transparencia y la versión pública que emita el servidor público habilitado de cada Sujeto Obligado; como así se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En conclusión, el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un documento en cualquiera de sus formas, a saber: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico de conformidad con el artículo 3, fracción XI de la Ley de la materia, el cual señala lo siguiente:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas****,*** *resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico…”*

Siendo aplicable, el Criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente:

**“*CRITERIO 0002-11. INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3°, 4°, 11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*1) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

***2) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y***

***3) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”***

De ahí que el **Sujeto Obligado** cuenta con el deber de satisfacer las solicitudes de acceso a la información que le sean formuladas y entregar la información pública que obre en sus archivos pudiendo ser de manera electrónica; más aún si la misma se trata de información relativa a obligaciones de transparencia, la cual se relaciona con aquella que se genere de acuerdo con sus facultades, atribuciones y obligaciones señaladas por la Ley en la materia[[1]](#footnote-1), así como de interés público, es decir, aquella que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, y cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los Sujetos Obligados[[2]](#footnote-2), como pudiera tratarse de aquella relacionada con las obligaciones de transparencia señaladas en los artículos 92 y 100 de la Ley de la Materia.

Del análisis a la solicitud de información, se advierte que la persona solicitante requirió medularmente del **Sujeto Obligado, con relación a servicios de asesoría o representación legal o cualquier otro en materia jurídica,** **lo siguiente:**

1. Convenios vigentes que se tienen;
2. Documento oficial que autoriza o que contiene la firma para otorgar autorización o equivalente para la prestación de dichos servicios, y donde se visualice el acuerdo de ambas partes, facultades y el nombre de quien o quienes son los involucrados, así como el monto de recurso público que se entrega o se ha entregado.

En respuesta, el **Sujeto Obligado** por conducto de la Directora de Administración y Tesorería y el Director de Servicios Jurídicos Asistenciales, informaron lo siguiente:

* La Directora de Administración y Tesorería informó que de la búsqueda exhaustiva y razonable sólo se cuenta con un convenio celebrado y vigente a la fecha de la solicitud denominado “Contrato de Donación de Servicios Profesionales en Materia Laboral, celebrado con la moral Mfontova Asoc. S.C”; proporcionando en versión íntegra dicho contrato celebrado el 24 de enero de 2024; y, el Acta de la Sexagésima Octava Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca número SMDT/CT/23082024-E-68 del 23 de agosto de 2024, donde se llevó a cabo bajo el punto 4 del orden del día, la presentación, y en su caso, aprobación de la propuesta de clasificación de información como confidencial contenida en el anexo para dar respuesta a la solicitud de información de nuestra atención, donde se consideró como información confidencial el RFC, Clave de Elector y Firma autógrafa.
* El Director de Servicios Jurídicos Asistenciales señaló que señala que todos los convenios vigentes que se tienen están publicados en la fracción XXXVIII “Convenios de coordinación, de concertación con el Sector Social o Privado” del artículo 92 de la página del IPOMEX, proporcionando el enlace: 

Consecuentemente, respecto al requerimiento consistente en “*el documento oficial en donde se autoriza o se firma la autorización o equivalente de asesoría legal, representación legal o cualquier tipo de servicio en materia jurídica*”, se indicó que el documento oficial que autoriza brindar asesoría legal, representación jurídica o cualquier tipo de servicio en materia jurídica es la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de carácter Municipal, denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, específicamente lo mencionado en el artículo 3 fracción VI, citando dicha porción legal:



Asimismo, dicho servidor público señaló que con relación a “*donde se visualiza el acuerdo de ambas partes, facultades y el nombre de quien o quienes son los involucrados que autorizaron la facultad de brindar asesoría jurídica al Sujeto Obligado*” fueron el entonces Gobernador Constitucional del Estado y el Secretario de Gobierno tal y como menciona la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de carácter Municipal, denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 16 de julio de 1985; proporcionando un link en formato cerrado para consulta de dicho documento: 

Una vez conocida la respuesta, **la parte Recurrente** al no estar conforme con los términos de la misma, interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, **inconformándose medularmente de la negativa a la entrega de la información, y que se dejaron a la vista datos en la información entregada.**

Así las cosas, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa se desprende que, el **Sujeto Obligado** rindió su informe justificado en el que medularmente **ratificó la respuesta inicial, y que se volvió a remitir el Contrato de Donación de Servicios Profesionales en Materia Laboral, celebrado con la moral Mfontova Asoc. S.C el 24 de enero de 2024 entregado en respuesta, en versión pública donde únicamente se clasificó el dato relativo a la clave de elector del representante legal de la moral indicada, así como el cuadro de clasificación de información pública propuesto por la Directora de Administración y Tesorería, en el que solamente se consideró la clasificación como información confidencial de la clave de elector indicada; así como, el Acta de la Septuagésima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia número SMDT-CT-29082024-E-70 del 29 de agosto de 2024 con la que se pretende sustentar la versión pública de dicho contrato.**

Por su lado, **la parte Recurrente** fue omisa en realizar manifestaciones o rendir alegatos que conforme a derecho resultaran procedentes.

Acotado lo anterior, atendiendo la naturaleza de la información requerida, por cuanto hace a **los convenios vigentes que se tienen a la fecha de la solicitud -5 de agosto de 2024-, con relación a servicios de asesoría o representación legal o cualquier otro en materia jurídica**, resulta conveniente insertar el contenido de los artículos 1°, fracción IV y 4° de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, que especifica que, **los organismos auxiliares públicos de carácter municipal, como el caso del** **Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca,** serán los encargados de realizar los actos relativos a la planeación, programación, presupuestación, ejecución y **control de la adquisición** (bienes muebles e inmuebles), arrendamiento (bienes muebles e inmuebles), y **la contratación de servicios de cualquier naturaleza**, los cuales se adjudicarán a través de **licitaciones públicas, invitación restringida o adjudicación directa, mediante convocatoria pública**, que señalan al respecto lo siguiente:

***“Artículo 1.-*** *Esta Ley tiene por objeto regular los actos relativos a la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes, y la contratación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen:*

*[…]*

***IV. Los organismos auxiliares*** *y fideicomisos* ***públicos, de carácter*** *estatal o* ***municipal.***

*…*

***Artículo 4.-*** *Para los efectos de esta Ley, en las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos:*

*I. La adquisición de bienes muebles.*

*II. La adquisición de bienes inmuebles, a través de compraventa.*

*III. La enajenación de bienes muebles e inmuebles.*

*IV. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.*

*V. La contratación de los servicios, relacionados con bienes muebles que se encuentran incorporados o adheridos a bienes inmuebles, cuya instalación o mantenimiento no implique modificación al bien inmueble.*

*VI. La contratación de los servicios de reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles.*

*VII. La contratación de los servicios de maquila, seguros y transportación, así como de los de limpieza y vigilancia de bienes inmuebles.*

*VIII. La prestación de servicios profesionales, la contratación de consultorías, asesorías y estudios e investigaciones, excepto la contratación de servicios personales de personas físicas bajo el régimen de honorarios.*

***En general, otros actos que impliquen la contratación de servicios de cualquier naturaleza. “***

(Énfasis añadido)

En ese contexto, conforme a los artículos 26 y 27 de dicho ordenamiento jurídico, se establece que las **adquisiciones**, arrendamientos y servicios, **se adjudicarán a través de procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa**, que señalan:

*“Artículo 26.- Las* ***adquisiciones****, arrendamientos y servicios se adjudicarán a través de* ***licitaciones públicas****,* ***mediante convocatoria pública.***

*Artículo 27.- La Oficialía Mayor, las entidades, los tribunales administrativos y los* ***ayuntamientos podrán adjudicar adquisiciones, arrendamientos y servicios****, mediante las excepciones al procedimiento de licitación que a continuación se señalan:*

***I. Invitación restringida.***

***II. Adjudicación directa”***

*(*Énfasis añadido*)*

De esta manera, se tiene que en cuanto a los procedimientos de adquisición que el **Sujeto Obligado** puede llevar a cabo conforme la Ley de Contratación en cita, se encuentran **las licitaciones públicas, invitación restringida y adjudicación directa.**

En cuando hace a la **adjudicación directa**, la Secretaría de la Función Pública, (consultable en <https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/1-3-3-adjudicacion-directa>), establece que es un procedimiento que se realiza sin puesta en concurrencia y, por ende, sin que exista competencia, adjudicándose el contrato a un proveedor que ha sido preseleccionado para tales efectos por la dependencia o entidad.

Por último, respecto a la **invitación restringida a cuando menos tres proveedores**, la Secretaría de la Contraloría (consultable en <http://www.contraloriadf.gob.mx/contraloria/cursos/ADQUISICIONES/paginas/32.php#:~:text=Es%20un%20procedimiento%20administrativo%2C%20de,tres%20oferentes%20a%20presentar%20propuestas%2C>) precisa que es un procedimiento de excepción a la licitación pública que permite a las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados y entidades, en forma discrecional, realizar un procedimiento para adquirir, arrendar o contratar, invitando a por lo menos tres oferentes a presentar propuestas.

Acotado lo anterior, si bien conforme la normatividad en cita el ente obligado puede llevar a cabo la contratación de servicios de cualquier naturaleza, de la respuesta proporcionada, específicamente sobre servicios de asesoría o representación legal o cualquier otro en materia jurídica, se advierte que a la fecha de la solicitud el ente público tiene vigente un contrato de donación celebrado con una moral por ese tipo de servicios.

Al respecto, resulta conveniente señalar que, se concibe como **donación en materia de asistencia social**, al acto desinteresado y voluntario en el cual una persona decide transferir bienes, dinero o servicios en favor de una organización, sin ningún tipo de interés en obtener algo a cambio.

Resulta relevante al tema, que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México en su página oficial (consultable en el enlace: [https://difem.edomex.gob.mx/fondos\_donaciones\_porque#:~:text=Donativos%20\*%20Centros%20de%20Asistencia%20Social%20Temporal,DIF.%20\*%20Organizaciones%20de%20la%20Sociedad%20Civil](https://difem.edomex.gob.mx/fondos_donaciones_porque#:~:text=Donativos%20*%20Centros%20de%20Asistencia%20Social%20Temporal,DIF.%20*%20Organizaciones%20de%20la%20Sociedad%20Civil). ), dispone que hay tres tipos de donaciones, los cuales consisten en los siguientes:

1. Efectivo: Recaudación en efectivo para causas específicas línea de captura.
2. Especie: Recaudación de productos y materiales diversos como pañales, leche, ropa, útiles escolares, material de construcción, equipamiento, medicinas, entre otros.
3. **Servicios: La prestación de servicios profesionales gratuitos a favor de un sector o causa específica**

Asimismo, se establece que entre los organismos a los que se pueden hacer donaciones de esos tipos, se encuentran los Sistemas Municipales DIF.

Por lo tanto, se advierte que el **Sujeto Obligado** cuenta con atribuciones para recibir en donación la prestación de servicios en favor del organismo descentralizado, los cuales pueden ser con relación a servicios de asesoría o representación legal o cualquier otro en materia jurídica; servicios que se pueden concertar a través de la celebración de un convenio o el contrato correspondiente.

Precisado lo anterior, ahora en cuanto al ámbito competencia del ente obligado, se advierte que este cuenta con una **Dirección de Administración y Tesorería**, **la cual tiene dentro de sus atribuciones celebrar contratos de servicios**, tal y como lo dispone la fracción XIII del artículo 20 del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, a saber:

*“Artículo 20.- Corresponde a la Dirección de Administración y Tesorería, quien tendrá además de las señaladas en el artículo 16 de la Ley, las siguientes atribuciones:*

*[…]*

***XIII. Suscribir contratos de bienes y servicios en términos de la legislación aplicable;***

*[…]”*

*(Énfasis añadido)*

De lo anterior, se advierte que la **Dirección de Administración y Tesorería** es la unidad administrativa competente para conocer de lo requerido, pues es el área que se encarga de suscribir los contratos en representación del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca por los servicios en materia legal que se presenten.

No obstante, no pasa por desapercibido que el ente obligado cuenta también con una Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales, que conforme el artículo 26 fracción II del Reglamento Interior de mérito, tiene dentro de sus atribuciones elaborar contratos de comodato y convenios de colaboración con la finalidad de que el SMDIF genere un beneficio y que a través de ellos permita ayudar a la población vulnerable del municipio como se muestra:

*“Artículo 26.- Corresponde a la Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales:*

*[…]*

*II. Elaborar contratos de comodato y convenios de colaboración con la finalidad de que el SMDIF genere un beneficio y que a través de ellos permita ayudar a la población vulnerable del municipio;*

*III. Planear y coordinar las actividades relacionadas con la gestión de apoyos asistenciales en materia jurídico familiar y de talleres que brinda el SMDIFTOL […]”*

Conforme lo anterior, si bien la Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales tiene atribuciones para elaborar contratos y convenios y de conocer de asuntos jurídicos, la naturaleza de los instrumentos jurídicos que elabora no se relacionan con la adquisición de servicios en materia legal, o la donación de dichos servicios.

Por lo que, se insiste la **Dirección de Administración y Tesorería** es la unidad administrativa competente para conocer de lo requerido.

De esta manera, atendiendo que en el presente asunto se pronunció dicha unidad administrativa, se colige que se dio cumplimiento al requisito de turnar la solicitud de información al área competente.

Al efecto, el procedimiento para la atención a las solicitudes de acceso a la información, establecido en los artículos 151, 159, 160, 162, 163, 164, 165 y 166, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, es el siguiente:

* Las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados deben garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona puede ejercer el derecho de acceso a la información; por lo que, son las responsables de hacer las notificaciones correspondientes, además de llevar a cabo de todas las gestiones necesarias para facilitar el acceso de la información;
* Los Sujetos Obligados podrán requerirle a los Solicitantes, que complementen, corrijan o amplíen su solicitud de información, cuando resulten los datos proporcionados insuficientes, incorrectos, incompletos o erróneos; solicitar dicha aclaración, interrumpirá el plazo para dar respuesta y comenzará a computarse el día siguiente al desahogo de esta;
* Las respuestas a los requerimientos informativos deberán notificarse al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder **quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de ésta.** Excepcionalmente, el plazo referido podrá ampliarse por siete días hábiles más, cuando existan razones fundadas y motivadas, a través del Comité de Transparencia;
* **Las Unidades de Transparencia garantizarán que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo con sus facultades, funciones y atribuciones, para que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la documentación solicitada, con el fin de que proporcionen las expresiones documentales que se encuentren en sus archivos o que estén constreñidos a elaborar;**
* El acceso se dará en la modalidad de entrega y en su caso, de envío elegido por el solicitante, cuando no pueda entregarse en dicha modalidad, el Sujeto Obligado deberá ofrecer otras; por lo cual, deberá fundamentar y motivar la necesidad de modificar el medio de entrega, y
* Las Unidades de Transparencia, tendrán disponible la información requerida durante un plazo mínimo de sesenta días hábiles, contados a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles; por lo que, una vez transcurrida dicha temporalidad, los Sujetos Obligados darán por concluida la solicitud y procederán de ser el caso, a la destrucción del material.

En ese sentido, se tiene que, **el procedimiento de búsqueda de la información se tiene por atendido.**

Acotado lo anterior, en el presente asunto, con relación al requerimiento en análisis consistente en **los convenios vigentes que se tienen a la fecha de la solicitud -5 de agosto de 2024-, con relación a servicios de asesoría o representación legal o cualquier otro en materia jurídica,** es de recordar que la Directora de Administración y Tesorería remitió de manera íntegra el Contrato de Donación de Servicios Profesionales en Materia Laboral, celebrado con la moral Mfontova Asoc. S.C el 24 de enero de 2024, que a su dicho es el instrumento vigente con que se cuenta a la fecha de la solicitud.

Documento el anterior que, se advierte colma lo requerido, en virtud de que se trata del instrumento jurídico -contrato- a través del cual se recibió en donación la prestación de servicios profesionales en materia laboral, que es el documento que guarda relación con lo requerido por el particular.

A lo anterior, no escapa de la óptica de este Órgano Garante que en dicho contrato se dejó a la vista datos personales que debieron protegerse, como lo es la clave de elector del representante legal de la moral con la que se celebró dicho instrumento jurídico, ante lo cual se procederá como más adelante se indicará.

No obstante lo anterior, vía informe justificado se advierte que el **Sujeto Obligado** remitió de nueva cuenta el contrato remitido en respuesta en versión pública, clasificando como información confidencial el dato que dejó visible en un primer momento - clave de elector del representante legal de la moral con la que se celebró dicho instrumento jurídico-, subsanando la omisión en que había incurrido en un primero momento.

Sin embargo, se advierte que el Acta del Comité de Transparencia que pretende sustentar la versión pública del contrato de mérito, no cumple con las formalidades previstas en la normatividad de la materia, en virtud de que en la misma se realiza la clasificación de otros datos públicos que en la versión pública entregada no fueron testados.

Para efecto de lo anterior, este Organismo Garante no omite señalar que, el derecho de acceso a la información puede ser restringido de manera excepcional por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por la Ley, a través de la clasificación de la información como confidencial o reservada para permitir el acceso, como se desprende del artículo 91 de la ley de la materia que es del tenor literal siguiente:

***Artículo 91.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.*

Entendiéndose como información reservada aquella que se clasifica de manera temporal cuya divulgación pueda causar algún daño; y como **información confidencial,** la que se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable que no son de acceso público, asimismo, haga referencia a los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponde a particulares, sujetos de derecho internacional o a Sujetos Obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

De manera que, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en sus artículos 140 y 143 prevé los siguientes supuestos para clasificar la información como reservada o **confidencial:**

***Artículo 140.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

***I.*** *Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;*

***II.*** *Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;*

***III.*** *Se entregue a la Entidad expresamente con ese carácter o el de confidencialidad por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;*

***IV.*** *Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;*

***V.*** *Aquella cuya divulgación obstruya o pueda causar un serio perjuicio a:*

***1.*** *Las actividades de fiscalización, verificación, inspección, comprobación y auditoría sobre el cumplimiento de las Leyes; o*

***2.*** *La recaudación de las contribuciones.*

***VI.*** *Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;*

***VII.*** *La que contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;*

***VIII****. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan quedado firmes****;***

***IX.*** *Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;*

***X.*** *El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes;*

*Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes; y*

***XI.*** *Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.*

***Artículo 143.*** *Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial, la clasificada como tal, de manera permanente, por su naturaleza, cuando:*

***I.*** *Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable;*

***II.*** *Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; y*

***III.*** *La que presenten los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.*

*La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.*

*No se considerará confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, ni tampoco la que sea considerada por la presente ley como información pública.*

De este modo, conforme al artículo 132 de la ley en referencia, para clasificar la información se debe de atender a lo dispuesto por la normativa y aplicar, de manera estricta, las excepciones del derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia, debiendo clasificar la información en el momento en que:

1. Se reciba una solicitud de acceso a la información;
2. Se determine mediante resolución de autoridad competente; y/o
3. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.

En ese sentido, es de precisar que la clasificación de la información no se da por el simple mandato de la ley, sino que es necesario que el **Sujeto Obligado,** cuando clasifique algún documento o información, ya sea todo o en parte, atienda lo dispuesto por la ley de la materia, siendo que dicha clasificación es un trabajo en conjunto tanto de los Servidores Públicos Habilitados, de las Unidades de Transparencia y del Comité de Transparencia del **Sujeto Obligado**, teniendo el deber los primeros de ellos de presentar ante la Unidad de Transparencia la propuesta de la clasificación de la información, para que luego esta se presente ante al Comité de Transparencia de así resultar procedente el proyecto de clasificación de la información y que finalmente sea este último quien apruebe, modifique o revoque la misma, como se desprende de los artículos 59 fracción V, 53 fracción X, y 49 fracciones II y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

*Artículo 59. Los servidores públicos habilitados tendrán las funciones siguientes:*

*(…)*

*V. Integrar y presentar al responsable de la Unidad de Transparencia la propuesta de clasificación de información, la cual tendrá los fundamentos y argumentos en que se basa dicha propuesta;*

*(…)*

*Artículo 53. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes funciones:*

*(…)*

*X. Presentar ante el Comité, el proyecto de clasificación de información;*

*(…)*

*Artículo 49. Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes atribuciones:*

*(…)*

*II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;*

*(…)*

*VIII. Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información;*

*(…)*

Bajo tales consideraciones, este Organismo Garante no omite señalar que, si el **Sujeto Obligado** advierte que la información solicitada contiene datos personales que sean susceptibles de ser clasificados como confidenciales,o, si por otro lado, por su propia y especial naturaleza, encuadra en alguno de los supuestos de reserva o de confidencialidad en su totalidad, deberá emitir un Acuerdo de Clasificación debidamente fundado y motivado que sustente la clasificación parcial, a través de la versión pública que emita, o bien, la restricción total del derecho de acceso a la información.

Asimismo, no obsta mencionar que el Acuerdo del Comité de Transparencia mediante el cual se clasifique la información como reservada o **confidencial,** de manera total o **parcial** debe emitirse siguiendo las formalidades previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, **de igual forma en dicho acuerdo se deben exponer de manera clara los fundamentos y razones que llevaron a la autoridad a clasificar la información de acuerdo con lo establecido en el artículo 149 de la Ley de la materia,** de lo contrario, implicaría dejar al solicitante en estado de incertidumbre, al no conocer o comprender las razones por las que se clasifica la documentación respectiva, es decir, si no se exponen de manera puntual las razones, de ello se estaría violentando el Derecho de Acceso a la Información del solicitante.

No obstante, si bien por el tipo de documentación solicitada por el particular, por su naturaleza puede contener datos personales susceptibles de protegerse, la misma es susceptible de entregarse en versión pública, llevando a cabo una clasificación parcial de la información contenida en el mismo.

En el caso, resulta relevante realizar el análisis al Acta de la Septuagésima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia número SMDT-CT-29082024-E-70 del 29 de agosto de 2024, donde se llevó a cabo bajo el punto 4 del orden del día, la presentación, y en su caso, aprobación de la propuesta de clasificación de información como confidencial contenida en el anexo para dar respuesta a la solicitud de información de nuestra atención que dio origen al recurso de revisión de referencia –contrato de donación-, se consideró como información confidencial, además de la clave de elector, el RFC y Firma autógrafa; estos últimos dos datos que del análisis a la versión pública del contrato se advierte que corresponde al RFC de la persona moral que donó los servicios, no obstante no se advierte la persona de quien se pretendió clasificar la firma.

Se inserta parte del contenido del Acta de mérito donde se advierte la clasificación de los datos de referencia:



Al respecto, con relación a las personas físicas o morales que realicen las actividades contratadas por las instituciones, renuncian implícitamente a una parte de su derecho a la intimidad al obtener beneficios y lucros de los recursos públicos por dicha contratación, por lo que **no puede considerarse como información clasificada lo relativo a su nombre, registro federal de contribuyentes y domicilio fiscal**, atento a que dicha información es la que puede generar certeza en los gobernados en que se está ejerciendo debidamente el presupuesto.

Robustece lo anterior el criterio orientador 04/21 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, el cual refiere:

***“Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas proveedoras o contratistas.*** *El RFC de contratistas o proveedores de los sujetos obligados debe ser público, ya que al tratarse de personas con contrataciones públicas, su difusión favorece la transparencia con la que deben administrarse los recursos públicos, en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”*

De esta manera el Registro Federal de Contribuyentes de la moral que donó los servicios no es susceptible de clasificarse como información confidencial.

Finalmente por cuanto hace a la **firma autógrafa**, que esté relacionada con el representante legal de la persona moral con la que se celebró el contrato de donación, se advierte que dicho dato corre la misma suerte, en virtud de que a través de ella manifiesta la voluntad de su representada de celebrar el instrumento jurídico y por tanto el interés público prevalece por encima de la protección a dicho dato, ya que contribuyen a la transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, por cuanto hace a la firma de servidores públicos, vinculada al ejercicio de la función pública como lo es la contratación de servicios es información de naturaleza pública, pues documenta y rinde cuentas sobre el debido ejercicio de sus atribuciones, lo cual acontece en el presente caso.

La publicidad de dicho dato, se robustece con el criterio 02/19, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que establece lo siguiente:

***“Firma y rúbrica de servidores públicos.*** *Si bien la firma y la rúbrica son datos personales confidenciales, cuando un servidor público emite un acto como autoridad, en ejercicio de las funciones que tiene conferidas, la firma o rúbrica mediante la cual se valida dicho acto es pública.”*

Acotado lo anterior, el único dato respecto del cual procedía la clasificación como información confidencial en el contrato de donación indicado es la clave de elector del representante legal de la moral donante de los servicios; por lo que, si bien la versión pública remitida en informe justificado fue realizada de manera correcta, el Acta del Comité de Transparencia que pretende sustentar la misma, no cumplió con las formalidades por lo antes mencionado.

Por lo que, en cumplimiento a la presente resolución, el **Sujeto Obligado** deberá hacer entrega del Acuerdo del Comité de Transparencia que sustenta la versión pública del contrato de donación remitido en informe justificado.

Además, sea este el medio para exhortar al **Sujeto Obligado** a que en próximas solicitudes de acceso a la información, en las que identifique que las documentales que dan atención a las mismas obran datos susceptibles de clasificarse, proceda a su protección mediante la elaboración de la versión pública correspondiente y la emisión del Acuerdo del Comité de Transparencia que sustente la misma, y haga la debida entrega en la respuesta.

Por otro lado, no pasa por desapercibido que el Director de Servicios Jurídicos Asistenciales en respuesta señaló que todos los convenios vigentes que se tienen están publicados en la fracción XXXVIII “Convenios de coordinación, de concertación con el Sector Social o Privado” del artículo 92 de la página del IPOMEX, proporcionando el enlace: .

Sin embargo, dicho pronunciamiento del Director de Servicios Jurídicos Asistenciales no colma lo requerido por el particular, ya que el instrumento jurídico al que pretende acceder el particular se relaciona con la prestación de servicios en materia jurídica, y el link remitido del IPOMEX corresponde a convenios de otra naturaleza, máxime que en el enlace proporcionado del único resultado que arroja que corresponde al segundo trimestre del 2024, no se advierten convenios celebrados:



Máxime que se insiste dicho link corresponde a información diferente a la requerida.

De esta manera, atendiendo a que hubo pronunciamiento del **Sujeto Obligado** por conducto del servidor público habilitado competente, esto es la Dirección de Administración y Tesorería, a fin de dar respuesta a la solicitud planteada, éste no está facultado para manifestarse sobre la veracidad de la información proporcionada, pues no existe precepto legal alguno en la Ley de la Materia que permita que, vía recurso de revisión, se pronuncie al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía el criterio 31-10 emitido por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que a la letra dice:

*“****El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no cuenta con facultades para pronunciarse respecto de la veracidad de los documentos proporcionados por los sujetos obligados.*** *El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es un órgano de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa de las solicitudes de acceso a la información; y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades. Sin embargo, no está facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por las autoridades en respuesta a las solicitudes de información que les presentan los particulares, en virtud de que en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no se prevé una causal que permita al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos conocer, vía recurso revisión, al respecto.”*

Ahora, por cuanto hace al requerimiento relativo a “***Documento oficial que autoriza o que contiene la firma para otorgar autorización o equivalente para la prestación de los servicios de*** ***asesoría legal, representación legal o cualquier tipo de servicio en materia jurídica, y donde se visualice el acuerdo de ambas partes, facultades y el nombre de quien o quienes son los involucrados***; ello, con relación a servicios de asesoría o representación legal o cualquier otro en materia jurídica.

Al respecto, es de indicar que el Contrato de Donación de Servicios Profesionales en Materia Laboral, celebrado con la moral Mfontova Asoc. S.C el 24 de enero de 2024, es el documento que acredita que la moral donante a través de dicho instrumento convino donar la prestación de los servicios en materia laboral, que de manera enunciativa más no limitativa involucra asesoría legal.

Sin embargo, en el caso de la representación legal, se considera necesario el otorgamiento de un poder notarial especial para representar al organismo; por lo que, del análisis armónico al requerimiento de información se advierte que el particular pretende acceder al documento a través del cual el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca otorgó poder a un particular (persona física o moral) para llevar a cabo la representación legal del organismo para velar por sus intereses en materia jurídica, pues el mismo contiene las características del documento al que pretende acceder.

Además de que este documento, se advierte que al ser protocolizado ante un fedatario público como lo son los Notarios, debe contar, de manera enunciativa más no limitativa con; el nombre del poderdante, del apoderado, el objeto del poder, las facultades otorgadas, así como las firmas de conformidad.

Al respecto, conviene señalar que conforme los artículos 6, fracción I, 7 y 10 fracción VII del Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca vigente, dispone lo siguiente:

*“Artículo 6.- La dirección y administración del SMDIFTOL, corresponde a:*

***I. La Junta de Gobierno;***

*[…]”*

*“Artículo 7.-* ***La Junta de Gobierno es el órgano superior del SMDIF*** *y le corresponde el ejercicio de las atribuciones señaladas en la Ley, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en otros ordenamientos legales aplicables.”*

*“Artículo 10.-* ***La Junta de Gobierno****, tendrá las facultades que establece el artículo 13 de la Ley, siendo las siguientes:*

*[…]*

***VII. Otorgar a personas o instituciones, poder general especial para representar al SMDIFTOL;***

*[…]”*

De lo anterior, se advierte que a la Junta de Gobierno como órgano superior del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, tiene dentro de sus atribuciones otorgar a personas o instituciones, poder general especial para representar al ente público.

Por lo que, de lo anterior se advierten atribuciones para contar con el documento al que pretende acceder el particular.

Máxime que de la lectura al contrato de donación remitido en respuesta e informe, en la
Cláusula Primera, se advierte que la moral donante convino prestar a título gratuito el servicio profesional consistente en: asesoría, patrocinio y representación legal en materia laboral respecto de juicios instaurados en contra del Sistema Municipal DIF, como se muestra:



De esta manera, que al ser el único contrato vigente con que cuenta el ente obligado relacionado con la solicitud, se desprende que dicho contrato no basta para prestar el servicio de representación legal en materia laboral, pues como se indicó se debe expedir, en este caso a la moral donante, un poder general especial para representar al organismo ante instancias en litigios laborales.

A mayor abundamiento, en la página oficial del Colegio de Notarios del Estado de México (consultable en el siguiente enlace: <https://colegiodenotariosedomex.org.mx/poderes-generales> ), define a un **poder especial al instrumento jurídico que se otorga para uno o más asuntos específicos, lo que limita la facultad del apoderado a los asuntos expresamente contenidos en el poder.**





De esta manera, la moral donante del servicio de mérito no puede llevar a cabo la representación del Sistema Municipal, sin contar previamente con el poder notarial respectivo que le otorgue tales atribuciones.

De ahí que el documento idóneo para atender el requerimiento en análisis es **el poder notarial a través del cual se le otorgó la representación legal a la moral Mfontova Asoc. S.C del organismo, derivado del Contrato de Donación de Servicios Profesionales en Materia Laboral, celebrado el 24 de enero de 2024 que fue remitido en respuesta e informe justificado;** en consecuencia, procede su entrega en versión pública.

Ahora, por cuanto hace al “…***monto de recurso público que se entrega o se ha entregado.***”; resulta dable tener por atendido dicho punto, en virtud de que del contrato remitido tanto en respuesta como en informe justificado, que a dicho del **Sujeto Obligado** es el que tiene vigente, se desprende que el mismo fue otorgado a título gratuito, es decir, la moral prestadora de los servicios los hace en calidad de donante, lo que implica que no reciba una contraprestación.

Finalmente, no pasa desapercibido que en el archivo electrónico denominado “***ANEXO DE LA 159-2024.pdf***” entregado en respuesta, en el Contrato de Donación de Servicios Profesionales en Materia Laboral, celebrado con la moral Mfontova Asoc. S.C el 24 de enero de 2024, se dejó a la vista a foja 1 la clave de elector del representante legal de la moral indicada, el cual es un dato de carácter confidencial que debió clasificarse en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Bajo este contexto, resulta procedente girar oficio al Titular de la Dirección General de Protección de Datos Personales, en atención al artículo 82, fracción XXVII de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios a fin de que en ejercicio de sus atribuciones determine lo conducente.

De esta manera, es que a criterio de este Órgano Garante los motivos de inconformidad hechos valer por la parte **Recurrente** en el recurso de revisión **05129/INFOEM/IP/RR/2024** resultan ser fundados, siendo procedente **Modificar** la respuesta del **Sujeto Obligado** y ordenar que en cumplimiento a la presente resolución se entregue, previa búsqueda exhaustiva y razonable, en versión pública, lo antes indicado.

**Quinto. Versión Pública.** Finalmente para la entrega del soporte documental que deberá proporcionar el sujeto obligado para dar satisfacción de la derecho humano de acceso a la información de la persona solicitante, deberá considerar que ello no es absoluto, sino que encuentra como excepciones que la información sobre la cual se peticiona el acceso, contenga datos que deban ser clasificados en los términos que la misma Ley de la Materia señala, el **Sujeto Obligado** tendrá que elaborar la versión pública de los documentos que vaya entregar para dar cumplimiento a esta resolución, a fin de satisfacer el derecho de acceso a la información pública de la recurrente sin menoscabar el derecho a la protección de los datos personales de terceros.

Lo anterior, de conformidad a lo que señalan los artículos 3 fracciones IX, XX, XXI y XLV, 91, 132 fracciones II y III, y 143 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que establecen:

*“****Artículo 3****. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*[…]*

***IX. Datos personales:*** *La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;*

***XX. Información clasificada****: Aquella considerada por la presente Ley como reservada o confidencial;*

***XXI. Información confidencial:*** *Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;*

***XLV. Versión pública:*** *Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.*

*[…]*

***Artículo 91.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.*

***Artículo 132.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

***I****. Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

***II****. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o*

***III****. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.*

*[…]*

***Artículo 143****. Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial, la clasificada como tal, de manera permanente, por su naturaleza, cuando:*

***I.*** *Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable;*

***II.*** *Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; y*

***III****. La que presenten los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.*

*La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.*

*No se considerará confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, ni tampoco la que sea considerada por la presente ley como información pública.”*

Igualmente, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día quince de abril de dos mil dieciséis, tienen por objeto establecer los criterios con base en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de documentos que contengan partes o secciones clasificadas.

Atendiendo el tipo de información que se ordena entregar en cumpliemienyo a la presente resolución, se advierte que la misma puede contener información pública como confidencial; por lo que, se procede a señalar los datos que actualizarían dichos supuestos:

* **Número de escritura pública, volumen y registro, así como la Notaría Pública y nombre del Notario que expidió la escritura:**

Sobre el número de escritura pública, volumen y registro, son datos que al encontrarse en testimonio notarial o atestado en Registros Públicos tienen naturaleza de públicos; aunado a que de su integración no arroja información confidencial de los comparecientes que protocolizan un acto jurídico ante Notario Público.

Por cuanto hace a la Notaría Pública y nombre del Notario que expidió la escritura es importante mencionar que existe un Directorio de Notarias Públicas en el Estado de México, por ende, el nombre y domicilio de los Notarios Público al estar en fuentes de acceso público no deben ser considerados confidenciales.

* **Firma de los servidores públicos**:

Sin mayor explicación al emitir actos de autoridad la firma y el nombre de los servidores públicos que en este caso intervinieron en la celebración instrumentos notariales que otorgan representación a un particular es un dato considerado público y en razón de ello **el Sujeto Obligado** debe dejarlos visibles en los mismos.

Del mismo modo, conviene referir lo expuesto en el Criterio orientador número 02/19 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que se inserta a continuación:

***Firma y rúbrica de servidores públicos.*** *Si bien la firma y la rúbrica son datos personales confidenciales, cuando un servidor público emite un acto como autoridad, en ejercicio de las funciones que tiene conferidas, la firma o rúbrica mediante la cual se valida dicho acto es pública.*

***Resoluciones****:*

*RRA 0185/17. Secretaría de Cultura. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.*

[*http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%20185.pdf*](http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%20185.pdf)

*RRA 1588/17. Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. 26 de abril de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora.*

[*http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%201588.pdf*](http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%201588.pdf)

*RRA 3472/17. Instituto Nacional de Migración. 21 de junio de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel Salas Suárez.*

[*http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%203472.pdf*](http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%203472.pdf)

Sin embargo, por cuanto hace a la **firma y rubrica** se considera de naturaleza pública **solo en el caso del representante o apoderado legal de la empresa**, pues si bien las mismas constituyen rasgos o conjuntos de rasgos, que hacen identificable a una persona, tratándose de estos, por las facultades que tienen dentro de la sociedad mercantil se debe privilegiar su publicidad, **púes a través de dichos datos se manifiesta expresamente el consentimiento de suscribir actos jurídicos que tienen impacto ante terceros, más aún cuando estos se hacen en representación de una persona moral que es donante de un servicio al municipio.**

Robustece lo anterior el criterio reiterado vigente con clave de control: SO/001/09/2019.06, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI, que lleva por rubro y texto los siguientes:

***“Datos de identificación del representante o apoderado legal.******Naturaleza jurídica.*** *El nombre, la firma y la rúbrica de una persona física, que actúe como representante o apoderado legal de un tercero que haya celebrado un acto jurídico, con algún sujeto obligado,* ***es información pública, en razón de que tales datos fueron proporcionados con el objeto de expresar el consentimiento obligacional del tercero y otorgar validez a dicho instrumento jurídico****.”*

Sin embargo, este Instituto considera que los **datos de identificación, contacto y ubicación de los socios,** podrían actualizar la causal de clasificación establecida en el artículo 143, fracción I, de la Ley de la materia, por lo que, es necesario analizar algunos de los datos que pudieran obran en las actas constitutivas, siendo estos los siguientes:

* **Registro Federal de Contribuyentes (RFC).**

Al respecto, cabe precisar que las personas físicas que deban presentar declaraciones periódicas o que están obligadas a expedir comprobantes fiscales, tienen que solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, esta inscripción es realizada por el Servicio de Administración Tributaria, quien entrega una cédula de identificación fiscal en donde consta la clave que asigna este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.

De acuerdo a lo establecido en el artículo en comento, esta clave se compone de trece caracteres alfanuméricos, con datos obtenidos de los apellidos, nombre(s), fecha de nacimiento del titular, más una homoclave que establece el sistema automático del Servicio de Administración Tributaria.

Ahora bien, la clave del Registro Federal de Contribuyentes, es el medio de control que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, para exigir y vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes; mientras que los particulares tramitan dicho dato, con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de naturaleza fiscal.

Conforme a lo expuesto, el Registro Federal de Contribuyentes, es un dato personal, ya que hace a las personas físicas identificas e identificables, además de que las relaciona como contribuyentes de las autoridades fiscales. Es de destacar que dicho dato únicamente sirve para efectos fiscales y pago de contribuciones, por lo que se trata de un dato relevante únicamente para las personas involucrada, en el pago de estos, en el presente caso, del pago del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo.

Lo anterior, resulta congruente con el Criterio 19/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el cual se señala lo siguiente:

*“****Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas.*** *El RFC es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial.”*

De tal suerte, el Registro Federal de Contribuyentes de los comparecientes que participan en la protocolización de escrituras públicas no guarda relación con la transparencia de los recursos públicos, por lo que constituye un dato personal confidencial al actualizar el supuesto normativo del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, **salvo se trate del RFC de la persona moral, pues como se indicó es un dato público.**

* **Clave Única de Registro de Población (CURP).**

El artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone la obligación de los ciudadanos de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos.

El artículo 85 de la Ley General de Población, prevé que corresponde a la Secretaría de Gobernación el registro y acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero.

Acorde con lo anterior, el artículo 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, establece en su fracción III, que la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal tiene la atribución de asignar y depurar la Clave Única de Registro de Población a todas las personas residentes en el país, así como a los mexicanos que residan en el extranjero.

De conformidad con lo precisado por la propia Secretaría de Gobernación en la dirección <https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/html/informacionecurpPS.html>, la Clave Única del Registro de Población –CURP-, es un instrumento de registro que se asigna a todas las personas que viven en el territorio nacional, así como a los mexicanos que residen en el extranjero y se compone de dieciocho elementos, representados por letras y números, que se generan a partir de los datos contenidos en el documento probatorio de la identidad del interesado (acta de nacimiento, carta de naturalización o documento migratorio) de la siguiente forma:

• El primero y segundo apellidos, así́ como al nombre de pila.

• La fecha de nacimiento.

• El sexo.

• La entidad federativa de nacimiento.

Los dos últimos elementos de la Clave Única de Registro de Población evitan la duplicidad de la Clave y garantizan su correcta integración.

Como se desprende de lo anterior, la Clave Única de Registro de Población es un dato personal confidencial, ya que por sí sola brinda información personal de su titular y lo hace identificado e identificable, motivo por el cual se aprueba su eliminación de las versiones públicas, ya que además no guarda relación con el desempeño laboral de un individuo, simplemente se trata de un trámite administrativo requerido por la autoridad federal para hacer identificables a las personas.

Resulta aplicable en la especie, como argumento orientador, el Criterio 18/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

*“****Clave Única de Registro de Población (CURP).*** *La Clave Única de Registro de Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como información confidencial.”*

De acuerdo con lo anterior, se confirma la clasificación de la Clave Única de Registro de Población, por tratarse de un dato personal confidencial, en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Domicilio particular.**

De acuerdo a lo señalado en los artículos 2.3 y 2.5 del Código Civil del Estado de México, el domicilio es un atributo de la personalidad y un derecho de las personas; además que tiene como propósito que una persona pueda establecerse temporal o permanentemente en un lugar determinado, para habitar, establecer su centro de trabajo o negocios.

De la misma manera, lo establece el artículo 29 del Código Civil Federal, al precisar que el domicilio de personas físicas, es el lugar donde residen habitualmente, el lugar del centro principal de sus negocios, donde residan o el lugar donde se encuentren.

En ese contexto, la dirección o domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo que, permite hacerlo identificable y ubicable, propiciando que pueda ser molestado en su casa o negocio, de este modo, los datos que permiten a cualquier individuo con esfuerzos mínimos identificar el lugar de residencia o de trabajo constituye un dato personal y, por ende, confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas.

Por lo tanto, se actualiza la clasificación, de conformidad con la fracción I, del artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Nacionalidad o lugar de nacimiento.**

Respecto a dicho dato, cabe precisar que es un atributo de la personalidad que señala al individuo como miembro de un Estado, es decir, es el vínculo legal que relaciona a una persona con un País determinado, por lo que, se trata de un dato confidencial, susceptible a su clasificación en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Edad.**

Al respecto, este Instituto advierte que la edad es información referida a la esfera privada de los particulares, dado que la misma da cuenta de los años cumplidos, el nivel de madurez, las características físicas y de raciocinio de una persona, por lo que resulta procedente clasificar dicho dato en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Fecha de nacimiento.**

La fecha de nacimiento es un dato personal, toda vez que consiste en información concerniente a una persona física identificada o identificable, toda vez que revela el día exacto en que nació, así como, la edad de la persona, que tal como se analizó previamente es clasificada, más aun cuando este dato se encuentra vinculado con el nombre de una persona en específico.

Conforme a lo anterior, se colige que se trata de un dato concerniente a la vida privada de la persona, en virtud de que darlo a conocer se afectaría la intimidad de la misma; por lo tanto, es considerado un dato de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Estado civil.**

El estado civil es un atributo de la personalidad, de acuerdo con el artículo 2.3 del Código Civil del Estado de México, e indica si las personas son solteras o casadas y sólo se comprueba con las constancias relativas del Registro Civil. Por lo que es un tema que tiene que ver con la vida privada, ya que, para acceder a un cargo público, el estado civil de las personas es irrelevante, ya que tener uno u otro no influye en el mejor o menor desempeño de un cargo público.

De esta manera, se trata de un dato personal confidencial que tiene que ver únicamente con la vida privada de las personas, motivo por el cual se considera un dato personal en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Clave de registro o elector del representante legal.**

Al respecto, este Instituto localizó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se aprueban diversas disposiciones relativas a la forma y contenido de la Lista nominal de electores residentes en el extranjero, que se utilizará con motivo de la jornada electoral del primero de julio de dos mil doce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de abril de dos mil doce, en el cual establece que la clave de elector, se conforma por las consonantes iniciales de los apellidos y el nombre del elector, seguido de su fecha de nacimiento (dos dígitos para el año, dos dígitos para el mes, dos dígitos para el día), número de la entidad federativa de nacimiento, letra que identifica el género y una homoclave compuesta de tres dígitos, dando un total de 18 caracteres.

Conforme a lo anterior, se puede advertir que, con la clave de elector, se podrían obtener indicios o datos completos de una persona, que la podría ser identificada e identificable, pues se podría inferir el nombre de la persona, así como, su fecha y entidad de nacimiento, los cuales son considerados de su vida privada.

Por lo tanto, al ser un dato que hace reconocible a una persona física, resulta procedente su clasificación como información confidencial en términos de lo dispuesto por el artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Entorno a lo que aquí nos interesa, los Lineamientos Quincuagésimo, Quincuagésimo primero, Quincuagésimo segundo, Quincuagésimo cuarto y Quincuagésimo quinto señalan las formalidades que deberá llevar el acuerdo de clasificación que deberá emitir el **Sujeto Obligado**, siendo estas las siguientes:

*“CAPÍTULO VIII*

*DE LOS ELEMENTOS PARA LA CLASIFICACIÓN*

***Quincuagésimo.*** *Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán establecer sus propios modelos o formatos para la elaboración de versiones públicas de documentos o expedientes, siempre y cuando cumplan lo establecido en los presentes Lineamientos, así como en las correspondientes Leyes Generales.*

***Quincuagésimo primero.*** *Toda acta del Comité de Transparencia deberá contener:*

*I. El número de sesión y fecha;*

*II. El nombre del área que solicitó la clasificación de información;*

*III. La fundamentación legal y motivación correspondiente;*

*IV. La resolución o resoluciones aprobadas; y*

*V. La rúbrica o firma digital de cada integrante del Comité de Transparencia.*

*[…]*

*En los casos de resoluciones del Comité de Transparencia en las que se* ***confirme la clasificación de información confidencial solo se deberán de identificar los tipos de datos protegidos, de conformidad con el lineamiento trigésimo octavo.***

***Quincuagésimo segundo.*** *Para la clasificación y elaboración de versiones públicas de documentos que contengan información clasificada como reservada o* ***confidencial,*** *las áreas de los sujetos obligados deberán tomar las medidas pertinentes tendientes a asegurar que el espacio utilizado para testar la información no podrá ser empleado para la sobreposición de contenido distinto al autorizado por el Comité.*

*En el caso específico de la clasificación y elaboración de versiones públicas de documentos que contengan información confidencial, las áreas de los sujetos obligados deberán:*

***I. Fijar la fecha en que se elaboró la versión pública y la fecha en la cual el Comité de Transparencia confirmó dicha versión;***

***II. Señalar dentro del documento el tipo de información confidencial que fue testada en cada caso específico, de conformidad con el lineamiento trigésimo octavo; y***

***III. Señalar las personas o instancias autorizadas a acceder a la información clasificada.***

*En los documentos de difusión electrónica, señalar en la primera hoja y en el nombre del archivo, que la versión pública corresponde a un documento que contiene* ***información confidencial.***

***[…]***

***Quincuagésimo cuarto.*** *Cuando el Comité de Transparencia confirme la clasificación de documentos reservados y/o* ***confidenciales****, sea total o parcialmente; se deberá anexar al expediente la resolución que determinó la clasificación o, en su defecto, identificar en la carátula del expediente del cual formen parte, la fecha y sesión del Comité de Transparencia en la que se confirmó dicha clasificación.*

***Quincuagésimo quinto.*** *Cada área del sujeto obligado podrá designar formalmente a una o más personas como responsables del testado, que sean encargadas de la adecuada elaboración o supervisión de las versiones públicas de los documentos o expedientes, verificando que cumplan con los requisitos señalados en las Leyes Generales, los presentes Lineamientos y demás normativa aplicable antes de su confirmación por el Comité de Transparencia.” (Énfasis añadido)*

Asimismo, deberá observar los Lineamientos Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, establecen lo siguiente:

*“****Quincuagésimo sexto****. Cuando la elaboración de la versión pública del documento o expediente que contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, genere costos por reproducción por derivar de una solicitud de información o determinación de una autoridad competente, ésta será elaborada hasta que se haya acreditado el pago correspondiente.*

***Quincuagésimo séptimo****. Se considera, en principio, como información pública y no podrá omitirse de las versiones públicas la siguiente:*

***I****. La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título V de la Ley General y las demás disposiciones legales aplicables;*

***II.*** *El nombre de los integrantes de los sujetos obligados en los documentos, y sus firmas autógrafas o digitales, cuando sean utilizados en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público, y*

***III****. La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los sujetos obligados, así como el ejercicio de las facultades o actividades de los servidores públicos, de manera que se pueda valorar el desempeño de los mismos.*

*Lo anterior, siempre y cuando no se acredite alguna causal de clasificación, prevista en las leyes o en los tratados internacionales suscritas por el Estado mexicano.*

***Quincuagésimo octavo****. Los sujetos obligados garantizarán que los sistemas o medios empleados para eliminar la información en las versiones públicas sean irreversibles, de tal forma que no permitan su recuperación o la visualización de la misma.”*

Por lo tanto, la entrega de documentos en su versión pública debe acompañarse necesariamente del Acuerdo del Comité de Transparencia que la sustente el cual debe estar debidamente fundado y motivado, en el que se expongan los fundamentos y razonamientos que llevaron al **Sujeto Obligado** a testar, suprimir o eliminar datos de dicho soporte documental, ya que no hacerlo, se reitera que lo entregado no tendría un sustento jurídico ni resultaría ser una versión pública, sino más bien una documentación ilegible, incompleta o tachada; ya que el no justificar las causas o motivos por las que no se aprecian determinados datos -ya sea porque se testan o suprimen- deja al solicitante en estado de incertidumbre, al no conocer o comprender porque no aparecen en la documentación respectiva.

Así, con fundamento en lo prescrito en los artículos 5 párrafos trigésimo tercero, trigésimo cuarto y trigésimo quinto fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185, fracción I, 186, fracción III, así como 188 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

1. **R E S U E L V E:**

**Primero.** Resultan **fundados** los motivos de inconformidad hechos valer por la parte **Recurrente** en el recurso de revisión **05129/INFOEM/IP/RR/2024,** por lo que, en términos del Considerando **Cuarto** de la presente resolución, se **Modifica** la respuestadel **Sujeto Obligado.**

**Segundo.** Se **Ordena** al **Sujeto Obligado**, en términos de los Considerandos **Cuarto y Quinto** de esta resolución, **haga entrega vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX),** previa búsqueda exhaustiva y razonable,en versión pública, lo siguiente:

* **El poder notarial a través del cual se le otorgó la representación legal a la persona moral Mfontova Asoc. S.C, derivado del Contrato de Donación de Servicios Profesionales en Materia Laboral, celebrado el 24 de enero de 2024 que fue remitido en respuesta e informe justificado.**

*Para la entrega en versión pública, se deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen de los soportes documentales objeto de la versión públicas que se formule y se pongan a disposición de* ***la parte Recurrente****, mismo que igualmente hará de su conocimiento.*

**Tercero. Notifíquese,** vía **SAIMEX**, al Titular de la Unidad de Transparencia del **Sujeto Obligado,** la presente resolución para que conforme a los artículos 186, último párrafo y 189, párrafo segundo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente, y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**Cuarto.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **Sujeto Obligado** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**Quinto. Notifíquese** vía SAIMEX**,** la presente resolución a la parte **Recurrente**, y hágase del conocimiento que en caso de que considere que la presente resolución le causa algún perjuicio, podrá promover el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**Sexto. Gírese** oficio a la Dirección de Protección de Datos Personales de este Instituto para hacer de su conocimiento la presente resolución, a fin de que en ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con el artículo 82 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, determine lo conducente, en términos de lo señalado en el Considerando Cuarto de la presente resolución.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. Artículo 92. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: (…) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: (…) XXII. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados…” [↑](#footnote-ref-2)